



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: SILVIA MARÍA DE LAS MISERICORDIAS RAMOS GUTIÉRREZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 020 2021 00255 01
Sentencia: S-315

AUTO

En atención a la escritura pública 3377 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor de la Dra. SANDRA CECILIA ÚSUGA ECHAVARRÍA, portador de la T.P. N° 258.012 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades

codemandadas, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 28 de marzo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

SILVIA MARÍA DE LAS MISERICORDIAS RAMOS GUTIÉRREZ demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las demandadas al pago de las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 8 de noviembre de 1964; que estuvo afiliada y cotizando al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES; que posteriormente se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP PORVENIR S.A.; que luego se vinculó a la AFP PROTECCIÓN S.A.; que su vinculación a tales entidades no estuvo precedida de una verdadera, libre y plena manifestación de voluntad, ya que no contó con una información veraz y suficiente sobre las ventajas y desventajas de ese cambio; que los promotores de los fondos privados no le suministraron una información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta sobre todas las implicaciones del traslado

de régimen pensional; y que en el RAIS su medada pensional sería muy inferior comparada con aquella a la que tendría derecho en caso de poder regresar a COLPENSIONES.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su afiliación a esa entidad, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y legal y como excepciones propuso inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su afiliación a esa entidad, aclarando que la decisión adoptada fue basada en una manifestación libre y voluntaria luego de recibir una asesoría adecuada, completa, veraz, responsable y honesta sobre el RAIS y sus implicaciones de forma objetiva e integral. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y la prima del seguro previsional y aplicación del precedente sobre actos de relacionamiento.

PORVENIR S.A. niega la totalidad de hechos de la demanda indicando que la afiliación se realizó de forma libre y voluntaria en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época, efectuándose la debida

asesoría y entregándose una información clara, suficiente y veraz. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que el documento de vinculación fue suscrito con conocimiento real acerca del acto jurídico que realizaba y sin presión alguna. Como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 28 de marzo de 2022, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP COLPATRIA S.A., hoy PORVENIR S.A., así como el posterior traslado dentro de ese mismo régimen, ORDENÁNDOLE a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ a todas las AFP del régimen privado la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima recibidos con cargo a su propio patrimonio y durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a cada entidad, incluyendo la respectiva indexación; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas, reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD e incluirlas en la historia laboral como semanas válidas; y iv) CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a 2 smlmv a cargo de la primera y 1 smlmv a cargo de la segunda.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado de COLPENSIONES presentó recurso de apelación indicando que no es dable la declaratoria de ineficacia de los actos demandados, debido a que cumplieron los requisitos de fondo y de forma para su validez; el traslado se dio en

debida forma sin que hubiese circunstancias que pudieran invalidar dichos actos jurídicos. Agrega que es necesario proteger el principio de la sostenibilidad financiera del sistema motivo por el cual solicita se adicione la sentencia en lo relativo a los rubros que deben ser trasladados, los cuales deben incluir la indexación de los valores que corresponde a las cotizaciones y los rendimientos financieros según lo establecido en la sentencia SL 1251 del 2020.

El apoderado de PORVENIR solicita se revoque la sentencia en su integridad teniendo en cuenta que, para el momento de realizarse el traslado, no se obligaba a aportar documento distinto al formulario de afiliación o al respectivo reglamento del fondo. Para la época en la que se suscribió el formulario no existía ni se llegaba a pensar que fuese a existir el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el que los dejara sin validez alguna para probar la voluntad de los afiliados para vincularse al RAIS; por el contrario, estaba reforzada la afiliación con el formulario de afiliación para entender válidamente emitido el consentimiento por parte de la demandante.

Agrega que no está llamada a devolver los gastos de administración o sumas distintas a las cotizaciones y rendimientos según concepto emitido por la Súper Intendencia Financiera de Colombia el 15 de enero de 2020. La devolución de estos gastos de administración con destino a COLPENSIONES configura un enriquecimiento sin causa a favor de la codemandada; no hay una norma legal ni constitucional que disponga la devolución de tales gastos de administración, ya que los únicos rubros a devolver son cotizaciones y rendimientos. Solicita se declare la prescripción respecto a estas sumas de dinero teniendo en cuenta que no están llamados a financiar la pensión de vejez, ni le pertenecen al afiliado en ninguno de los 2 regímenes.

Finalmente, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. solicita se modifique lo referente a la orden de trasladar con destino a COLPENSIONES lo correspondiente al capital de la demandante junto con los

rendimientos, gastos de administración y seguro previsional, ya que, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, lo que trae consigo la declaratoria de la ineficacia es asumir la inexistencia de los traslados entre regímenes, por lo que debe procurarse llegar a una condena que resulte congruente con ese efecto perseguido.

Lo procedente a trasladar a COLPENSIONES sería el capital junto con los rendimientos, sin haber una condena adicional por conceptos de gastos de administración ya que son dineros que PROTECCIÓN tendría que sacar de su propio patrimonio, lo que implicaría un enriquecimiento sin causa por parte de COLPENSIONES debido a que en el RPM también se hubieran surtido dichos descuentos. Dicho de otro modo, PROTECCIÓN sufriría un detrimento patrimonial en tanto debe sacar dichas sumas de su propio patrimonio luego de haber aplicado lo correspondiente por descuentos en cumplimiento de un deber legal.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de PORVENIR S.A. presentó sus alegatos de conclusión a través de los cuales reitera los argumentos presentados en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

Lo mismo ocurre en el caso de COLPENSIONES, agregando que en la toma de éste tipo de decisiones se debe tener en cuenta las implicaciones económicas y administrativas que ellas tienen, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema.

El apoderado de la demandante solicitó se confirme en su totalidad la sentencia de primera instancia con fundamento en la línea jurisprudencial decantada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido, con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. SILVIA MARÍA DE LAS MISERICORDIAS RAMOS GUTIÉRREZ realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** SILVIA MARÍA DE LAS MISERICORDIAS RAMOS GUTIÉRREZ nació el 8 de noviembre de 1964; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 27 de enero de 1989, completando en esa entidad un total de 347.43 semanas de cotización; **(iii)** el 16 de septiembre de 1995 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP COLPATRIA S.A., hoy PORVENIR S.A.; y **iv)** posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A. según formulario del 30 de abril de 1998, entidad en la que se encuentra vinculada en la actualidad.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la

información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un

análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Devolución cuotas de administración y demás conceptos.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación de las distintas AFPs, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como

la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.” (Resaltado por la Sala)*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)”

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA, sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como

ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Indexación cotizaciones y rendimientos financieros

La Sala no acoge la tesis que sostiene el apoderado de COLPENSIONES en cuanto a que existe un criterio jurisprudencial que permite ordenar la indexación, no solo de los conceptos que conforman las cuotas de administración, sino también la cotización misma y los rendimientos financieros. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de ordenar esa indexación, pero limitado a las comisiones de administración, porcentajes destinados a los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y a las deducciones al fondo de garantía de pensión mínima, más no respecto de los rendimientos y cotizaciones.

Y no lo ha hecho porque la misma naturaleza del Régimen de Ahorro Individual no lo permite, ya que los aportes que hace el afiliado van a generar necesariamente una utilidad, ganancia o rentabilidad mínima dada su calidad de administradora de los recursos de cada uno de ellos, mientras que lo que se procura con la indexación es la actualización de determinadas sumas de dinero, como mesadas pensionales o las propias cuotas de administración, que, por el paso del tiempo, van perdiendo su valor.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada en todas sus partes.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 ´000.000, distribuidos entre ellas en partes iguales.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Medellín, el día 28 de marzo de 2022.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 ´000.000, distribuidos entre ellas en partes iguales.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **26bf9a17af113472a53f9bcd818abeec343bfbbda10a7d4e3829fc215dad4ac6**

Documento generado en 23/11/2022 02:01:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>